

Selección de artículos de
LE MONDE
diplomatique

Introducción
por Víctor Hugo de la Fuente

Los horizontes del movimiento estudiantil
por Gabriel Boric

¿Y cuál es la revolución educativa?
por Camila Vallejo

La democracia está más viva que nunca
por Giorgio Jackson

La respuesta de Chile ante el Coronavirus
por Izkia Siches

Fin al Lucro
por Nicolás Grau

Chile: La verdadera vida de las trabajadoras de casa
por Luz Vidal Huiriqueo

La ineficiente guerra contra el narcotráfico
por Eduardo Vergara B.



www.editorialauncreemos.cl
www.lemondediplomatique.cl

Selección de artículos de
LE MONDE
diplomatique

Textos publicados en Le Monde Diplomatique 2011-2022

ESCRITOS ANTES DE GOBERNAR

ESCRITOS ANTES DE GOBERNAR

Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson,
Izkia Siches, Nicolás Grau, Luz Vidal Huiriqueo
y Eduardo Vergara

La editorial AÚN CREEMOS EN LOS SUEÑOS
publica la edición chilena de *Le Monde Diplomatique*.
Director: Víctor Hugo de la Fuente

Suscripciones y venta de ejemplares:
San Antonio 434 Local 14 - Santiago.
Teléfono: (56) 22 608 35 24
E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl
www.editorialauncreemos.cl
www.lemondediplomatique.cl

Diseño: Cristián Escobar

Copyright 2022 Editorial Aún Creemos En Los Sueños.

Primera edición: abril 2022
ISBN: 978-956-340-186-8

ÍNDICE

Introducción por Víctor Hugo de la Fuente	5
Los horizontes del movimiento estudiantil por Gabriel Boric	7
¿Y cuál es la revolución educativa? por Camila Vallejo	15
La democracia está más viva que nunca por Giorgio Jackson	21
La respuesta de Chile ante el Coronavirus por Izkia Siches	27
Fin al Lucro por Nicolás Grau	35
La verdadera vida de las trabajadoras de casa por Luz Vidal Huiriqueo	41
La ineficiente guerra contra el narcotráfico por Eduardo Vergara B.	49

Introducción

por Víctor Hugo de la Fuente*

En *Le Monde Diplomatique* hemos publicado más de trescientos textos de líderes y lideresas sociales, en su sentido más amplio (estudiantiles, medioambientales, sindicales, mapuches, poblacionales, defensores de derechos humanos, feministas, etc. etc.)

En nuestras páginas han expresado sus protestas, sus críticas, sus reivindicaciones, sus propuestas y también sus sueños.

Muchos de esos textos los hemos recopilado en libros: *Otro Chile es Posible*, *Haciendo camino*, *Cambiar el modelo*, *Recuperar los recursos naturales*, *las batallas por el agua*, *Otra política es posible*, *Revolución feminista*, *Lucha mapuche*, *La rebelión chilena* y *Mujeres constituyentes*, entre otros.

En el primero de estos libros, OTRO CHILE ES POSIBLE, publicado a fines de 2011, señalamos en la presentación: *“Los estudiantes buscan nuevas maneras de continuar el movimiento y avanzar hacia un cambio radical del sistema. El desafío está planteado, hay que unir y movilizar a los movimientos sociales, ampliar la coordinación en la senda trazada por los estudiantes, con una nueva forma de hacer política, que implique una verdadera representatividad, que interprete a los jóvenes y a las grandes mayorías del país, que hoy no se*

*DIRECTOR DE LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE.

sienten representadas en los actuales partidos políticos y por lo tanto tampoco en el parlamento ni en el gobierno. Urge una nueva alternativa, amplia, democrática, popular, que logre hacer posible un nuevo Chile”.

Constatamos que mucho ha cambiado, en una década, en nuestro país.

Recientemente publicamos el libro “La hora de los nadie” con reproducción de textos de Rodrigo Mundaya cuando era portavoz de Modatima, y ahora es Gobernador de la Región de Valparaíso y sigue siendo portavoz de su movimiento social.

Varios de las compañeras y compañeros que han escrito en *Le Monde Diplomatique* han llegado al gobierno: Gabriel Boric a la presidencia de la República, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Izkia Siches y Nicolás Grau hoy son ministros y Luz Vidal y Eduardo Vergara encabezan subsecretarías.

Nos parece relevante reproducir en este libro los textos, escritos entre 2011 y 2021, y leerlos tomando en cuenta el contexto en que fueron escritos.

Muchas esperanzas están puestas en las nuevas autoridades, así como en las y los constituyentes y también en quienes hoy son líderes sociales y en las distintas organizaciones de base, colectivos, asambleas, federaciones, sindicatos, asociaciones y todas las fuerzas vivas de la sociedad, que deben seguir movilizándose por llevar adelante las reivindicaciones de un país más justo y solidario. Mucho camino queda aún por recorrer y sin la lucha popular no se conseguirá avanzar.

Hagamos realidad la esperanza que *otro Chile es posible*. ♦

La lucha por una educación gratuita, democrática y de calidad en este 2012

Los horizontes del movimiento estudiantil

por Gabriel Boric*

El 2011 marcará un antes y un después en la historia reciente de Chile. Lo dice todo el mundo. Pero lograr hacer de este “después” que se inicia un ciclo efectivamente distinto al “antes” que se cierra, es un desafío que está abierto. Cuán favorable será para las aspiraciones populares el Chile que al calor de las crecientes movilizaciones se empieza a forjar, sólo el desarrollo de las luchas sociales lo podrá determinar. Es algo que está en nuestras manos.

De nada sirve conformarnos con lo hecho y cruzarnos de brazos. Nuestro deber es realizar una reflexión colectiva sobre el momento que vive el país y las tareas que nosotros, como movimiento estudiantil y también como izquierda, debemos cumplir para contribuir con nuestra rebeldía a la construcción de nuevas y convergentes fuerzas sociales transformadoras, que asuman como propia la tarea de cambiar Chile.

Es fácil caer en el vicio de embriagarse con aspectos superficiales y perder de vista las relacio-

*PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE (FECH). ACTUALMENTE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE *LE MONDE DIPLOMATIQUE* EN MAYO 2012.

nes de fuerza que determinan el curso general de las cosas. Ha habido muchas movilizaciones, han caído ministros, la popularidad del Presidente y los partidos continúan a la baja. Pero cuidado, sobredimensionar los efectos de nuestras acciones y menospreciar las de nuestros adversarios puede llevarnos a fallar al momento de definir las tareas pendientes. Que son muchas.

El movimiento estudiantil ha conquistado un grado de autoconciencia, organización y disposición de lucha inédito en su historia. Pero no seamos autocomplacientes. Todavía no ceden los pilares sobre los cuales los poderosos están parados. Más allá de la magnitud de las movilizaciones y el descrédito de la clase dirigente, campea una extendida desarticulación social, y en términos políticos el país todavía continúa preso de “dos derechas” que viven en otro planeta. Una oficial y otra encubierta, pero derechas al fin y al cabo.

La santa alianza del neoliberalismo chileno busca como sea presentar el extendido malestar social como síntoma de que avanzamos al desarrollo. Tras sus cómodos escritorios, nos dicen que no hay nada de qué preocuparnos, que nuestra infelicidad es demostración de lo bien que han hecho las cosas. No quieren ceder ni un centímetro en la defensa de un modelo educativo basado en el lucro y la competencia, sometido a fin de cuentas a la ley del dinero.

No pienso únicamente en los tecnócratas del Gobierno, ni en los exponentes más caricaturescos de la derecha cavernaria, tipo Cristián Labbé

o Jovino Novoa. Los jefes de la Concertación siguen siendo más parte del problema que de la solución, pues en lugar de proponerse superar la obra del pinochetismo, en educación y otros ámbitos, plantean simplemente cómo administrarla mejor. De esa forma, sólo acentuarán la concentración de riqueza y poder en unos pocos sin resolver los problemas que aquejan a las mayorías.

El mejor ejemplo fueron los arrogantes dichos de Ricardo Lagos en enero pasado. Ante la pregunta sobre cuál era su autocrítica tras el agotamiento del modelo educacional consolidado durante los gobiernos de la Concertación, el “Tigre del Sur” (como se titula su último libro sobre él mismo), contestó sin sonrojarse: “Lo primero es que yo lo puse (el tema) en marzo, antes de que los estudiantes estuvieran en la calle. ¿Estamos? ¿Y por qué tengo que hacer una autocrítica?” (1)

Los ejemplos sobran. El punto es que siguen existiendo grandes obstáculos para hacer realidad las aspiraciones mayoritarias del país por una educación al servicio de la realización individual y colectiva de los ciudadanos, concebida por tanto como un derecho y no como un negocio. Son todavía muchos los muros por derribar y muchas las incapacidades propias que resolver. Identificarlas es tener la mitad del problema resuelto.

Superar la camisa de fuerza pinochetista

Lo primero es hacerle ver al país la real magnitud de la transformación necesaria para responder a los anhelos de una ciudadanía cada día más movilizada. En lo educacional, la demanda por una

Reforma Integral, fundada en el fortalecimiento de la educación pública y una firme regulación del sector privado -ampliamente respaldada en la sociedad- no es procesable en los marcos del modelo actual. Exigen su redefinición, un cambio de paradigma. He ahí el sentido de los cambios a implementar.

Las principales fuerzas políticas y sus centros de pensamiento no han recogido ese guante, pues todavía operan bajo la idea de introducir ajustes al modelo heredado de los 80. Así, sacan su discusión del debate y contribuyen a naturalizar la política social de la dictadura, basada fundamentalmente en el principio de subsidio a la demanda y su consecuente traducción en la política pública: la focalización del gasto social.

La aplicación de este principio ha resultado nefasta, pues tiene como consecuencias directas el aumento de la segregación, el imperio de la capacidad de pago de las familias como criterio rector del acceso a una educación de calidad y el encarecimiento de la educación ante su subordinación al hambre de lucro del empresariado. Implica además negar instituciones que forjen vínculos comunes en la sociedad. Una suerte de suicidio colectivo. Una involución social.

Los argumentos utilizados para naturalizar la política social subsidiaria son francamente débiles. Que todos los países desarrollados, o en vías de, caminan en esa dirección. Falso. Es cosa de mirar nuestra región o los países más igualitarios de Europa. ¿Alguien de verdad se atreve a sostener que Finlandia o Brasil están mirando a Chile

para saber qué hacer con su educación? Los mismos que lo dicen ante la opinión pública reconocen que no es así en los pasillos del Congreso o de cualquier seminario serio.

Que la política universalista es muy cara. Argumento muy extendido, que en el fondo no niega la deseabilidad de esta política, sólo dice que es una cuestión de recursos. Que la focalización es deseable, porque el Estado no puede ayudar a los que “tienen más”. Este es un argumento ideológico. Los verdaderamente ricos son tan pocos en Chile que financiarles la educación a sus hijos tiene bajísimo impacto. Pero además, es deseable hacerlo, para que los jóvenes de todas las clases sociales se formen en ambientes heterogéneos y puedan así forjarse vínculos comunes. Que los más ricos y sus empresas no paguen impuestos es otra cosa, he ahí el problema.

Nuestro rol, por tanto, es apuntar a cambiar la esencia del modelo, no tan sólo sus excesos. Debemos pasar del reinado autoritario del principio de subsidio al mercado al principio de universalidad garantizada por el Estado. ¿Razones? Muy simple: queremos que Chile sea un país inclusivo, más igualitario y que adopte un modelo de desarrollo integral y autosustentable, para lo cual es imprescindible liberar la producción de conocimiento del interés egoísta del mercado.

Un movimiento unitario, audaz y transformador
Pero pasar a una nueva fase en la movilización requiere que aprendamos de nuestros errores. Como certeramente lo señaló Sergio Grez, en su

artículo de *Le Monde Diplomatique* “Chile 2012: el movimiento estudiantil en la encrucijada”, debemos sortear los peligros que acechan a diestra y siniestra (2).

Por un lado, la confianza ingenua en una institucionalidad que ahoga toda búsqueda por superar el legado dictatorial nos deja como vagón de cola del oportunismo del establishment y nos hace olvidar que nuestra fuerza radica en la amplitud social de nuestro movimiento y en la movilización que seamos capaces de sostener.

Y por otro, la idealización también ingenua de la acción marginal, el “culto a la violencia ciega” y la pirotecnia de minorías que se piensan capaces de suplantar la acción colectiva por actos de iluminados. Este frecuente vicio nos aísla e impide forjar vínculos sólidos con el conjunto de la sociedad.

Ambos extremos son funcionales a las estrategias de desactivación y división del movimiento que han puesto en acción los poderosos. Nuestra respuesta debe ser una sola: construir un movimiento social por la educación ni disperso ni monolítico, sino unitario. De eso se tratan nuestros esfuerzos por ampliar la Confech para transformarla, de a poco pero a paso firme, en una organización más democrática, dinámica y efectivamente representativa de todos los estudiantes universitarios de Chile, estudien donde estudien. En esto, ya hemos avanzado con la inclusión de muchas federaciones de instituciones privadas y la preparación de un Congreso Refundacional.

De eso se trata también la nueva forma de relación que queremos establecer entre estudiantes universitarios y secundarios, buscando recomponer las confianzas para actuar en unidad. No queremos imponer la agenda de los universitarios, de un determinado sector político ni los momentos o formas de movilización. Queremos respetar la autonomía de todos los espacios organizativos y avanzar a una efectiva y franca coordinación. Divididos seremos derrotados, la unidad es necesaria para tener más fuerza pero sobre todo porque si no cruza a todos los niveles educativos, no hay reforma integral posible.

Debemos también darle mayor coherencia a nuestra agenda de demandas. No queremos resolver problemas particulares, sino cambiar la educación porque queremos cambiar la sociedad. No se trata de armar un petitorio como quien escribe una lista para ir al supermercado. Nuestra agenda de demandas debe prefigurar la nueva sociedad por la cual luchamos. Una sociedad basada en la realización de las aspiraciones populares y la emancipación social, intelectual y política de las mayorías.

Proponemos y exigimos pues, una gran transformación. Basada en el principio de universalidad del derecho a la educación y en el fortalecimiento y la expansión de la educación pública en todos sus niveles. Reconociendo la democratización de todas las instituciones educativas como un paso ineludible si queremos un país de ciudadanos, soberano. Bregando por una regulación firme como política de Estado del sector privado

de la educación superior, para frenar los atropellos a sus estudiantes y la subordinación de sus instituciones a intereses particulares. Y considerando la urgencia de producir conocimiento e innovación de avanzada con sentido país y vocación de desarrollo.

Estas son las convicciones que sostienen nuestro compromiso con la consigna de Educación gratuita, democrática y de calidad. No sólo no retrocederemos un paso de las banderas ondeadas el año pasado ni flaquearemos en su defensa. Nuestra elección irrenunciable es avanzar para continuar abriendo caminos que ensanchen los alcances de los cambios que la sociedad reclama. No escucharemos más sermones ni llamados al descanso. Esto recién comienza. ◆

1. Ver Revista Qué Pasa, 26 de enero 2012, “¿Y por qué tengo que hacer una autocrítica?”, <http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2012/01/19-7614-9-y-por-que-tengo-que-hacer-una-autocritica.shtml>

2. Ver “Chile 2012: El movimiento estudiantil en la encrucijada”, Sergio Grez Toso, Edición chilena de *Le Monde Diplomatique*, enero-febrero de 2012.

Los cambios en la educación chilena que anunció la dupla Piñera-Lavín

¿Y cuál es la revolución educativa?

por Camila Vallejo*

El gobierno de los gerentes materializó su propuesta educativa, la llamó “revolución” aunque los cambios que incorpora no hagan otra cosa que profundizar el modelo de mercado en esa área. Como en el caso de los directores de los colegios, que les asigna un papel de gerentes de colegios concebidos como empresas.

Tras haber escuchado por cadena nacional al Presidente Sebastián Piñera, en la que dio a conocer una serie de medidas en el campo de la educación que irían orientadas a mejorar la calidad y la equidad de ésta, nos hemos preguntado, al menos los principales actores del mundo de la educación, por qué esta serie de medidas se han anunciado como la “Gran Revolución Educativa”.

¿Dónde está lo revolucionario?, ¿acaso estas medidas apuntan al origen de la crisis educativa, tales como la institucionalidad, el marco regulatorio o su financiamiento a la demanda? Nada apunta a un cambio estructural de la realidad inequitativa y segmentada de nuestra edu-

*PRESIDENTA DE LA FECH. WWW.FECH.CL. ACTUALMENTE MINISTRA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE *LE MONDE DIPLOMATIQUE* EN ENERO-FEBRERO 2011.

cación. La necesidad de responsabilizar constitucionalmente al Estado en el aseguramiento del derecho a la educación queda nuevamente en el olvido y el derecho a la libertad de enseñanza (que no es más que la libertad de los colegios para escoger a los padres según lo que puedan pagar) sigue guiando el escenario libremercadista de la educación.

De la estructura administrativa o municipalización de la educación escolar, tampoco se plantean cambios reales. Por el contrario, se sigue reproduciendo la lógica del financiamiento a través de vouchers que sólo significan la privatización del gasto público, beneficiando cada vez más al sistema privado subvencionado en desmedro de la ya débil y reducida educación pública municipal.

Las medidas se enfocan en aspectos accesorios, sobrevalorando los mecanismos de evaluación estandarizados como medidores y diferenciadores de la calidad de los establecimientos y los incentivos económicos como forma de asegurar buen desempeño. Estos mecanismos lamentablemente carecen tanto de sustento técnico como de pertinencia social, de capacidad de diagnosticar y entender la realidad de nuestro país, y la situación de crisis de nuestro sistema.

Sobre los sistemas de evaluación estandarizados como la PSU, el SIMCE y la prueba INICIA, son evidentes las consecuencias que trajo la Ley "No Child Left Behind" 2003, durante el gobierno de George W. Bush (1), que asociaba el financiamiento escolar a mejoras en las notas de los test. Concluyentes fueron los dichos del Premio Nacio-

nal de Economía, James Heckman (2), al señalar que los niños terminaron aprendiendo sólo lo que les era testeado, corrompiendo el proceso educativo en los colegios al entrenar solamente para las pruebas, develando el fracaso de la política educativa estadounidense para asegurar calidad.

Efectivamente, los test no aseguran calidad, puesto que se centran en la etapa final del proceso educativo y no en su desarrollo. Son, además, instrumentos utilizados para fomentar la competencia en condiciones que son absolutamente desiguales. No olvidemos que los sostenedores privados que reciben subvención estatal, pueden seleccionar estudiantes, por lo que se segmenta el sistema escolar y se impide una evaluación adecuada de la calidad de la educación (3). Esto lo que hace es que las pruebas no sólo terminen siendo un reflejo de la desigualdad, sino que sean un componente fundamental para su reproducción.

El no asumir que estamos ante un sistema socioeducativo altamente segmentado e inequitativo evidencia la poca pertinencia de estas medidas para la realidad de nuestro país, lo que hace dudar de la intención por mejorar la calidad de todos los establecimientos, sobre todo los municipales. Las evaluaciones estandarizadas no aseguran calidad y propiciarán una competencia aún más descarnada por obtener buenos puntajes para recibir mayor financiamiento. La semaforización de los colegios promoverá la concentración de los “mejores” estudiantes y conllevará a una mayor exclusión, elitización y reducción del sistema público.

Los incentivos a los mejores resultados son también una política errada para un sistema educacional que arroja resultados muy diversos fruto de su alta segmentación. Las Becas de Vocación de Profesores premian económicamente a los mejores puntajes PSU, los cuales, en su mayoría, provienen de las familias de mayor ingreso, por lo que constituye una medida regresiva que refuerza las inequidades ligadas al origen social de los estudiantes y contribuye a reforzar el equívoco concepto del “buen estudiante”, aún asociado a quien obtiene un buen puntaje PSU y no a quienes tienen la vocación y el esfuerzo por aprender a pesar de la adversidad.

Evidentemente, no hay una relación directa entre el puntaje PSU y la vocación de los estudiantes hacia la pedagogía, tampoco se asegura la calidad de los programas a los cuales van a ingresar los estudiantes debido a que sólo se les exige estar acreditados dos años, es decir, no hay medida alguna que apunte a mejorar los procesos educativos, menos a reforzar las pedagogías de las instituciones públicas. Recordemos que esta medida se enmarca en la política gubernamental de aumentar aún más la liberalización de recursos fiscales al sector privado (FDI, Becas, Créditos, etc.)

Otro de los incentivos corresponde a la escala de sueldos por resultados de la prueba INICIA, la cual resulta inconcebible cuando observamos que es un mecanismo que sirve para garantizar mínimos de conocimientos, pero no para asegurar un buen desempeño docente futuro. El buen profesor no se determina por cuánto memorizó para una prueba, o cuánto contenido maneja, sino por su capacidad

de traspasar esos conocimientos a los estudiantes a través de la relación dialógica que puede establecer con ellos.

Por otro lado, si bien es cierto que uno de los problemas del buen desempeño de los establecimientos es la falta de directores con capacidades técnico-pedagógicas, se les pretende otorgar atribuciones que terminan por transformar a los establecimientos en verdaderas empresa y a sus directores en gerentes, con capacidad de escoger arbitrariamente su equipo técnico directivo, de evaluar descentralizadamente, de despedir con causales muchas veces ambiguas (incumplimientos “graves” del reglamento interno) y sin una política orientada a capacitar a los docentes mal evaluados para una adecuada reinserción laboral.

Se evidencia una falta de preocupación por las diversas condiciones de enseñanza y el contexto social en el que se desenvuelven los profesores, ya que los criterios de evaluación todavía se centran en los contenidos y no en el ambiente en el cual estos deben ejercer la pedagogía. Se suma la falta de éxito académico que puede llegar a tener los estudiantes cuando existe una movilidad de profesores muy grande entre escuelas por causa de los despidos anuales.

Los cambios curriculares son los que han generado mayor rechazo a nivel transversal, tanto del mundo social como de los actores políticos e intelectuales. Cabe señalar nuevamente la falta de sustento técnico respecto a la justificación del Ejecutivo para avalar esta propuesta. Aumentar las horas de Lenguaje y Matemáticas es

una medida que cae por su propio peso al revisar el informe de la OCDE 2009, que indica que las horas en matemáticas superan en 36 y 40 horas al promedio de los países de la OCDE y en 3 horas de lenguaje por sobre el promedio para los niños de 12 a 14 años (4).

Por otro lado, la propuesta también carece de una visión integral respecto al tipo de ser humano o ciudadano que queremos formar. La Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales son elementos de aprendizaje fundamentales para el reconocimiento y el entendimiento de la sociedad y el mundo en el cual nos desenvolvemos, nos permiten formarnos con pensamiento crítico y opinión, cuestiones fundamentales para el desenvolvimiento diario del ser humano puesto que otorga facultades para tomar decisiones y proyectar transformaciones sociales.

Claramente, de nada nos servirá saber leer, escribir y sacar cálculos, si no sabemos el origen de los conceptos, de las palabras, sus contextos históricos y sus desarrollos. Estaremos formando autómatas, meros reproductores de un injusto modelo de desarrollo, en un país que pide a gritos reconocer su pasado en un diálogo abierto y transparente, para poder al fin, proyectar un futuro mejor. ♦

1. “Que ningún niño se quede atrás”, ver texto en español en www2.ed.gov/spanol/parents/academic/.../parentsguide.pdf

2. Ver James Heckman, cuerpo Economía y Negocios, El Mercurio, 25 de noviembre de 2010

3. Ver Observatorio Chileno de Políticas Educativas en www.opech.cl

4. Ver Informe de la OCDE sobre la Educación chilena en www.oecd.org

El proceso del movimiento estudiantil y los cambios

La democracia está más viva que nunca

por Giorgio Jackson*

Más allá de los resultados que obtenga el movimiento estudiantil, los cambios ya están aquí y vinieron para quedarse. En pocos meses ha hecho un rápido aprendizaje, se sabe dónde poner la fuerza porque ha identificado la médula de las contradicciones que aprisionan a un gobierno de derecha, que pone su ideología por delante.

Desde hace más de cinco meses, todas las reivindicaciones sectoriales del movimiento estudiantil se han ido articulando a través de un eje central: la desigualdad que impera en Chile. La desigualdad entendida como una perpetuación de ésta, ha sido el foco que nos permitió hacer emerger el descontento que ha estado latente en amplios sectores de la sociedad y que no se expresaba en forma abierta, debido a un autocomplaciente discurso de las autoridades de gobierno.

Una vez instaladas las demandas sectoriales ancladas en la idea de que éstas son justas por-

*PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, FEUC (WWW.FEUC.CL). ACTUALMENTE MINISTRO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE *LE MONDE DIPLOMATIQUE* EN OCTUBRE 2011.

que hay una perpetuación de las desigualdades, el proceso comenzó a profundizarse y fuimos de a poco entrando –junto a la ciudadanía- en los problemas de fondo. Al inicio, no era llegar y plantear el debate constitucional porque no iba a ser comprendido; ello requería un proceso de aprendizaje -de la sociedad en general y de nosotros en particular- que es, tal vez, nuestro mayor éxito.

Desde nuestra demanda y discurso inicial de acceso a la educación, financiamiento y de democratización, hemos llegado a la formulación -a través de este proceso- de una clara demanda ciudadana por los cambios constitucionales. En este caminar han salido a la luz las contradicciones del sistema político chileno, sus limitaciones e incapacidades, así como el potencial que tiene este movimiento y los jóvenes para cambiar todo esto. Ha sido un proceso intenso y no exento de problemas, pero tremendamente esclarecedor.

Esta demanda cayó en terreno fértil. Cuando emergió la “Revolución pingüina” había un gobierno de la Concertación que, aunque administraba el mismo modelo, tenía una sintonía y un lenguaje que le permitió neutralizar y administrar ese movimiento y el descontento. Ahora hemos llegado al meollo de las contradicciones porque hay un gobierno que no tiene ni sintonía ni frecuencia para dialogar con esa ciudadanía; es más, es un gobierno que se muestra orgulloso de lo que piensa y es duro en esa postura ideológica, lo cual es lógico ya que son los creadores intelectuales del actual modelo.

Las culpas

Durante la Concertación era fácil que los gobernantes y autoridades culparan al sistema político, a la obstrucción opositora de derecha que no daba los votos para las reformas y usaba ese argumento para descomprimir la presión social, al tiempo que ocultaba su falta de convicción y coraje para impulsar cambios fuera del marco de “la política de los consensos”. Hoy, el gobierno no tiene a quién culpar, porque además concentra todo el poder. Eso permite que la presión social se concentre en un mismo punto: en la desigualdad del sistema. Eso hace que el movimiento sea más ambicioso, menos sectorial y más político, desde el punto de vista de que las demandas se hacen transversales.

Las reformas que levanta el movimiento estudiantil suponen, necesariamente, más y mejor democracia. Ya lo vimos el 4 de agosto pasado, cuando estábamos planteando una reforma tributaria para obtener los recursos que financien las demandas que postulamos o cuando, entre otras cosas, explorábamos la idea de un plebiscito para que participe la ciudadanía en las decisiones; la respuesta del gobierno fue la represión. Ese día llegamos a la médula de la contradicción del sistema. Esto nos lleva a hacernos cargo de las transformaciones más profundas que necesita Chile. Los jóvenes tenemos que proyectar este movimiento en el mediano y largo plazo y, por tanto, hacernos partícipes de esta construcción de sociedad, lo que nos llevará necesariamente a participar en los distintos procesos políticos que se avecinan. Esto requiere más democracia y participación.

Esta demanda por más y mejor democracia ha ido creciendo y es compartida ampliamente, tanto en el movimiento estudiantil como en otros movimientos sociales y la ciudadanía. El alto apoyo a las demandas y a la movilización de los estudiantes por la educación pública incluye, muy probablemente, el reclamo por el cambio del sistema electoral y el fin del binominalismo (1). Eso abre un amplio espacio de convergencia democrática. Esta institucionalidad no da el ancho, es una camisa de fuerza, y la ciudadanía cree que la clase política ya no responde a los intereses de la gente, por eso nuestra demanda está calzando con la ciudadanía y hace patente la necesidad de quitarse dicha camisa.

Tenemos la voluntad política de allegar la fuerza necesaria para estos cambios y para que este movimiento no pase a la historia como uno más. Nuestro sentido estratégico ha puesto en evidencia el desmoronamiento de las actuales alianzas políticas, la del gobierno y la oposición política. Eso abre el espacio para que entre nuestro proyecto, quizás no para ocupar el mismo espacio, pero sí para reordenarlo.

La rapidez de los tiempos

Si en los 60 la reforma universitaria demoró años, hoy los tiempos son más veloces y hacen que los cambios profundos sean más rápidos, de hecho ya están sucediendo. Se está rompiendo la frontera de lo posible, se está desplazando. Y los sentidos comunes están cambiando. El individualismo -“yo trabajo para darle educación a mis hijos y pago por ello”, como decía mucha gente- ha dado paso a nociones más colectivas, donde se constituye una mayoría so-

cial que busca que haya educación de calidad para todos, donde el Estado y “lo público” -que en estos tiempos es de nadie- vuelve a ser de todos. Este es el principal giro y eso desembocará, necesariamente, en mayor participación política. Esto comenzará a verse reflejado en las demandas que hará la ciudadanía a las autoridades, incluso locales, y a los candidatos al momento que hagan sus “ofertas”, eso es lo que viene. Porque este punto de inflexión que hemos vivido ha dejado a la democracia más viva que nunca. La gente está participando.

En el propio movimiento estudiantil y en sus instancias de decisión hemos crecido en madurez, y pese a las diferencias y discrepancias que a veces se hacen notorias, hay diversidad en un proyecto común, donde prima el colectivo por sobre las posturas individuales o de grupo. Esa es una garantía para lo que hemos dicho, hecho y esperemos que para lo que viene. No se ve cómo esto puede ser detenido, aunque tome tiempo los cambios ya han comenzado. El atrincheramiento del gobierno, en defensa de sus principios ideológicos, sólo genera más descontento y malestar en la ciudadanía, lo que no dejará de manifestarse en los conflictos que vengan, en las coyunturas políticas que se abran, e incluso en los procesos electorales.

Esta movilización, con la derecha al frente, que es como la lucha de David contra Goliat, ha generado unidad en la diversidad, ha impuesto el sentido colectivo del movimiento y su independencia, y eso ya es casi imposible de ser frenado. ◆

1. Ver encuesta CERC de septiembre de 2011 en www.cerc.cl

*Aprendizajes y dificultades en el combate
a la pandemia*

La respuesta de Chile ante el Coronavirus

por Izkia Siches*

El Coronavirus ha puesto a prueba a los sistemas sanitarios de todo el mundo, que repentinamente se vieron enfrentados a un virus nuevo, con un gran potencial de contagiosidad y letalidad. Los gobiernos se vieron forzados a tomar decisiones drásticas de aislamiento social, para evitar la mayor propagación del mismo y el colapso de la red sanitaria, pues con la experiencia de Italia y España quedó en evidencia que la toma tardía de estas medidas podía disparar la transmisión, elevando así la cantidad de personas con cuadros graves y fallecimientos.

Chile, pandemia y estallido social

En Chile, la pandemia nos encontró en un momento social complejo, después de un estallido social que había reventado la burbuja del “oasis de Latinoamérica”, con una ciudadanía movilizadada, autoridades con niveles bajísimos de aproba-

*PRESIDENTA COLEGIO MÉDICO DE CHILE. ACTUALMENTE MINISTRA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE *LE MONDE DIPLOMATIQUE* EN MAYO 2020.

ción y un proceso constituyente en marcha, que tendría como hito relevante el plebiscito del 26 de abril de 2020.

Frente a este escenario y comprendiendo la gravedad de la amenaza sanitaria, como Colegio Médico manifestamos desde el día uno nuestra disposición a trabajar en conjunto para enfrentar esta crisis y solicitamos insistentemente al gobierno la participación más directa de expertos con experiencia en pandemias, entendiendo la importancia de que las decisiones políticas contaran con un respaldo técnico que diera confianza a la ciudadanía y generaran consenso en la comunidad médica y científica. Esto era de gran relevancia, considerando que, de acuerdo a la experiencia internacional, nuestro país iba a tener que empezar a tomar medidas cada vez más restrictivas, que para muchos podían ser vistas como una manera de acallar el movimiento social. Lamentablemente, esta solicitud tardó en tener eco.

Primeras medidas

Como era de esperar y ante la inminente llegada del virus, el gobierno comenzó a tomar medidas. En enero, el Ministerio de Salud emitió alertas sobre Covid-19 a los departamentos de aduanas e inmigración para que detectaran los casos entrantes mediante un cuestionario voluntario, pero hubo muchos reportes de que este control no estaba siendo eficiente. Luego, el 2 de marzo se comenzó a exigir una declaración jurada obligatoria a todas las personas que ingresarán

desde países afectados, no obstante, la cuarentena era opcional en un inicio y los controles a los viajeros fueron débiles y poco sistemáticos. A fines de febrero se decretó Alerta Sanitaria, lo que permitía disponer de más recursos económicos y humanos para preparar la red asistencial.

El 3 de marzo se confirmó el primer caso importado en Chile y días después, el 11, finalmente, el Presidente formó un comité asesor de expertos compuesto por funcionarios de salud pública y académicos. El 14 de marzo, se declaró la fase 3 y desde el Colegio Médico y junto a los alcaldes, comenzamos a exigir un curso de acción más drástico, incluido el cierre de escuelas y universidades a nivel nacional.

El domingo 15 de marzo se anunciaron una serie de medidas que incluían un proyecto de ley para permitir que algunos reclusos cumplieran sus condenas bajo arresto domiciliario, la prohibición de eventos con 200 o más asistentes y la cuarentena para adultos mayores y hogares de menores. El Colegio Médico siguió exigiendo medidas más estrictas, como prohibir los eventos masivos y hacer que el test fuera gratuito, para avanzar en la estrategia de identificar los casos y aislarlos.

La presión social y el gobierno

Ante la falta de mayores definiciones por parte del gobierno, las universidades tomaron iniciativa propia de suspender clases presenciales, a lo que se sumaron algunos colegios y municipios. El Presidente no tuvo más alternativa que ceder y de-

cretar el cierre de las escuelas del país desde el 16 de marzo. Recientemente, el ministro de Salud ha afirmado públicamente haber estado en contra de esta medida, dando a entender que fue la presión de otras voces la que facilitó su ejecución.

Chile llegó a 100 casos confirmados el 16 de marzo y se declaró la fase 4 de la pandemia. La campaña de vacunación contra la influenza comenzó en paralelo, generando aglomeraciones de la población de riesgo en distintas comunas del país. Más tarde, esta misma escena se repitió a fin de mes con aglomeraciones para pagar los permisos de circulación, tras un error en una ley aprobada por el parlamento, que tuvo que ser corregida con un veto presidencial, y hemos visto que recurrentemente ocurren estas situaciones -totalmente evitables- en las sucursales de la Administradora de Fondos de Cesantía, bancos, notarías, entre otros.

La tercera semana de marzo estuvo marcada por falta de definiciones más estrictas. Esta vez fueron los alcaldes quienes tomaron la iniciativa, cancelando eventos, cerrando centros comerciales y declarando cuarentenas preventivas. Desde el Colegio Médico, seguíamos preocupados por las dudas que ponía la ciudadanía sobre las acciones del gobierno, por lo que comenzamos a reunirnos con organizaciones políticas de todo el espectro para discutir la necesidad de reconsiderar la fecha del plebiscito, y con representantes del mundo social para hacer un llamado a quedarse en el hogar y evitar nuevas manifestaciones públicas. Tanto la comunidad médica como otros actores,

insistimos en llamar a la ciudadanía a no salir, al mismo tiempo de presionar a las autoridades por una cuarentena obligatoria y cierre de la ciudad de Santiago. En ese momento, el Ministerio de Salud parecía concentrar sus esfuerzos en una batalla comunicacional con la sociedad, más que avanzar en la toma de nuevas definiciones. Era urgente asegurar que las personas se quedaran en casa, pese a que el gobierno no tomara medidas más categóricas con ese objetivo.

El 18 de marzo la presión logra nuevas respuestas. el gobierno finalmente declaró el estado de emergencia y las fronteras se cerraron. Además, el ministro del Interior convocó a un comité de distintas áreas, desde alcaldes, rectores de universidades, exministros y el Colegio Médico en la “Mesa Social Covid-19”. El mismo día se impuso el toque de queda nacional y se han ido decretando cuarentenas en distintas comunas y zonas del país, cordones y aduanas sanitarias, como medidas para disminuir la circulación de personas y el mantener distanciamiento físico. Esto de acuerdo con los datos epidemiológicos, que hasta ese momento no eran compartidos con el Colegio Médico ni las Sociedades Científicas del país. Cabe recordar que estas medidas son tomadas sin ser consultadas con la Mesa Social y, muchas de ellas, tampoco con el Consejo Asesor.

El gobierno, presionado por otros actores políticos y sociales, ha ido tomando iniciativas que, sumadas a la destacable acción de una ciudadanía que tomó conciencia de evitar el contacto social independientemente de si su territorio es-

taba o no en cuarentena, han logrado hasta ahora evitar un alza mayor en el número de contagios.

El problema de los datos

Hemos sido insistentes en visibilizar una falta de transparencia en los datos, fundamentales tanto para el conocimiento de la situación dinámica territorial de la pandemia, como para la toma de medidas sanitarias. El primer informe con datos desagregados por comunas se publica el 30 de marzo, casi a un mes del primer caso. Aún no conocemos la cantidad de test realizados en cada comuna y sus diferencias según las características socioeconómicas de los territorios. En muchos otros países, estos datos se ponen a disposición de la comunidad científica, con el fin de que puedan analizarlos y aportar con propuestas. Lamentablemente, este hermetismo no solo limita la posibilidad de sumar apoyos técnicos para enfrentar la pandemia, sino que además suma desconfianzas a una ciudadanía a la que se le debe el mayor respeto y agradecimiento por su enorme colaboración a evitar una mayor propagación del virus.

¿Tiempo de relajar medidas?

Por ahora, Chile no ha alcanzado su capacidad de cuidados críticos, aunque algunos lugares como Temuco y Punta Arenas se han visto estresados por la demanda asistencial, teniendo que trasladar pacientes y reforzar su número de camas con ventilación mecánica a más del doble de su capacidad habitual. Si bien los números hasta

el momento muestran un escenario “controlado”, esto en ningún caso nos puede permitir ser triunfalistas y relajar las medidas de distanciamiento y confinamiento, pues sin ellas el escenario sería dramático.

Nos parece que aún no es el momento de relajar la estrategia. Peligrosamente, a fines de abril se observa un aumento importante de casos en varias comunas populares del gran Santiago, y núcleos urbanos del Norte Grande, como las ciudades de Iquique y Antofagasta, y al 27 de abril tenemos 6.288 casos positivos, el número más alto de personas con capacidad de transmitir la infección desde el inicio del brote. Es por esto que nos han sorprendido los recientes anuncios gubernamentales sobre el regreso a una “nueva normalidad”, queriendo acelerar el retorno presencial a clases y trabajos, mientras reabre centros comerciales. Ejemplo de aquello fue la iniciativa por el retorno al trabajo presencial de los funcionarios públicos para el pasado 20 de abril, que luego de recibir el rechazo de múltiples reparticiones públicas, agrupaciones de trabajadores y entidades técnicas, incluido el Consejo Asesor nombrado por el mismo gobierno, fue reconsiderada y cambiada por una futura estrategia gradual.

Hoy en Chile y el mundo debemos ser capaces de discutir temas de fondo en materia social, económica y sanitaria, que posibiliten a las sociedades para enfrentar esta u otras pandemias. Mientras ello no ocurre, hoy la cotidianidad levanta innumerables preguntas que muestran

los vacíos que se hacen más evidentes en estas circunstancias ¿Quién y cómo entrega certezas a la tercera edad para quedarse en casa si no tienen con qué alimentarse ni pueden acceder a sus medicamentos? ¿Quiénes se quedan al cuidado de los hijos de los padres que trabajan en el sistema sanitario?.

Al parecer nos encontramos en ese momento histórico que nace como necesidad -y abre una oportunidad- de repensar el nuevo orden social, económico y político desde la solidaridad y colaboración, en base a un oponente que nos une en un mismo problema.

Desde el Colegio Médico de Chile continuaremos trabajando activamente por proteger a las personas y asegurar las condiciones mínimas necesarias para discutir un cambio de estrategia. Mientras, como en el resto del mundo, seguiremos aprendiendo todos los días sobre este virus y agradeciendo a la ciudadanía y al personal de salud, que con su compromiso han evitado, hasta ahora, situaciones de colapso como se han visto en otras latitudes. ◆

Fin al Lucro

por Nicolás Grau*

La consigna de fin al lucro ha estado presente en cada una de las movilizaciones sociales de los últimos años, tanto en el ámbito escolar como en el universitario. Frente a tal demanda, la respuesta de las autoridades y “expertos” (tanto de derecha como del sector que ha dominado el debate educacional en la Concertación) ha sido: el lucro no es el problema, si lo que importa es la calidad de las instituciones, no nos debería importar si estas lucran o no, la demanda por el fin al lucro es netamente ideológica.

Cabe notar que en este tipo de respuestas el adjetivo ideológico tiene una connotación negativa, equivalente incluso a la ausencia de argumentos serios. Habría que preguntarse por qué realizar una crítica desde una visión general, comprensiva y coherente de cómo queremos vivir (esto es, desde una perspectiva ideológica) constituiría una debilidad de la crítica. Me imagino que aquello se debe a que se espera que los

*MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA WWW.NUEVAIZQUIERDA.CL

ESTUDIANTE PHD EN ECONOMÍA, U. PENNSILVANIA. ACTUALMENTE MINISTRO DE ECONOMÍA. PUBLICADA EN [HTTPS://WWW.LEMONDEDIPLOMATIQUE.CL/](https://www.lemondeDIPLOMATIQUE.CL/) EL 21 DE JUNIO DE 2011.

individuos discutan en nuestra democracia desde una posición despolitizada, donde no existan diferencias de fondo, donde todos queremos lo mismo y el único debate es el cómo lograrlo.

Desde mi punto de vista existen buenas razones para estar contra el lucro en la educación, razones que por cierto son parte del sentido común de un sector mayoritario del estudiantado. Por una parte, hay una razón ideológica, de carácter anticapitalista (¡qué horror!). Por otra parte, hay argumentos de peso para pensar que la existencia de lucro puede dificultar la capacidad de nuestro sistema educativo de asegurar calidad.

A las personas de izquierda, en general, no nos gusta el capitalismo, sobre todo nos desagrada el mecanismo que explica su desarrollo. Es decir, no aceptamos que la lógica de beneficio y ganancia personal sea la mejor entre todas las formas posibles en que la humanidad pueda organizarse. Somos tercos y pensamos que sería viable, y mejor, un orden social que se basara en los principios de comunidad, cooperación y solidaridad. Dicho esto, que es parte importante de nuestra ideología, muchos reconocemos en el capitalismo, en particular en el mercado, una capacidad aun sin alternativa de organizar una porción considerable, diría mayoritaria, del quehacer económico de nuestra sociedad.

Así, bajo el prisma de una ideología de izquierda resulta directo tratar de restringir el espacio de acción del mercado, y sus lógicas de enriquecimiento personal como motor de desarrollo, a los sectores de la economía en los cuales

no parece existir una mejor alternativa, donde este constituye un mal menor. De esta manera, la pregunta que cabe hacerse en el debate presente es: ¿constituye el afán de lucro una característica indispensable para el aseguramiento de calidad en el sistema de educación chileno? La respuesta, basada en la evidencia (pues la realidad tiene un rol importante incluso para los desquiciados que tenemos ideología), es claramente negativa.

En Chile las mejores universidades, privadas y estatales, no tienen fines de lucro, lo que en nuestro contexto significa respetar la ley. En Estados Unidos, que se suele indicar como un ejemplo donde la educación privada ha logrado altísimos estándares, muchas de las universidades de mayor prestigio son privadas, pero tales universidades son justamente lo opuesto a un negocio, los privados en vez de sacar rentas de ellas dan suculentas donaciones que permiten llevar a cabo investigaciones al más alto nivel. Es una lógica opuesta al lucro lo que permite el desarrollo de estas universidades. A su vez, existe en el contexto escolar internacional un sinnúmero de experiencias exitosas que no tienen el lucro como motor de su desarrollo.

Por otro lado, como hemos dicho, el afán de lucro puede dificultar el aseguramiento de calidad. La razón es simple, para que una universidad o colegio cuyo interés sea el lucro tenga buena calidad se requiere que la regulación del Estado y la presión de la demanda logren que aun cuando al dueño del establecimiento le gustaría retirar todos sus ingresos como utilidades

este no pueda hacerlo pues aquello le significaría perder la acreditación o bien quedarse sin demanda (a esto llamaremos disciplinar la oferta). Pues bien, no es difícil imaginar como ambos mecanismos son sumamente débiles en el caso de la educación. Por una parte, las familias tienen muy poca información de la calidad de lo que están recibiendo, entre otras cosas pues ésta no será evaluada hasta haber terminado su carrera, hagamos lo que hagamos nunca le podremos dar a la familia suficiente información como para lograr que la demanda efectivamente discipline a la oferta.

Por otra parte, la experiencia chilena ha demostrado los múltiples problemas que puede tener un sistema de acreditación. El sistema de acreditación chileno puede y debe mejorar (pues se requiere para todas las instituciones, las que lucran y las que no), pero hay muchas razones para pensar que no será suficiente para disciplinar a la oferta: se necesita una capacidad inexistente para acreditar a todas las carreras (pues hay universidades buenas en algo pero muy malas en otras áreas); no es claro que es lo que se debe acreditar (¿calidad, coherencia institucional, pertinencia?) y aunque se sepa, acreditar un aspecto permitirá que los dueños con afán de lucro puedan extraer utilidades debilitando las áreas menos relevantes para la acreditación; los acreditadores son agencias que obviamente provienen de las universidades (y no creo que haya otra manera) lo que se presta para tráfico de influencias y corrupción, etc.

En otras palabras, dada la tremenda complejidad del bien educación parece poco creíble que dos establecimientos con el mismo potencial, pero uno con afán de lucro y otro sin, vayan a lograr los mismos niveles de calidad: el carácter de los controladores del establecimiento sí importa. A menos que pensáramos que los potenciales controladores que sí tienen afán de lucro tuvieran un mayor talento para manejar instituciones educativas, cuestión que no tiene ninguna base lógica ni empírica.

Los estudiantes, algunos desde una ideología de izquierda otros simplemente desde su sentido común, no quieren que las lógicas capitalistas dominen los colegios y universidades donde ellos estudian. Desean ser formados en ambientes donde el objetivo último sea su desarrollo y el desarrollo del conocimiento en general, no quieren confiar sus deseos de surgir y aprender a personas que les darán una buena educación en la medida que se vean forzados por la regulación y los mecanismos de mercado.

Los estudiantes tienen buenas razones para pedir lo que piden, ¿alguien los escuchará? ♦

La pandemia profundiza la precariedad

Chile: La verdadera vida de las trabajadoras de casa

por Luz Vidal Huiriqueo*

Chile, a partir del 18 de octubre de 2019, cambió y se puso en relevancia la enorme desigualdad que se desarrolló por más de treinta años. Quedó de relieve la desigualdad en educación, salud, vivienda, transporte, justicia, entre tantos otros problemas, y sobre todo que el desarrollo económico que Chile tanto ostentaba a nivel latinoamericano no llegaba a todos. Lo que es peor, solo era para un pequeño grupo de la sociedad.

Desde nuestro Sindicato de trabajadoras de casa particular la situación no complicaba demasiado; las compañeras tenían su trabajo y eso parecía no tocarlas, ellas solo se dedicaban a trabajar, largas jornadas en la modalidad puertas adentro (las trabajadoras viven en las casas de las personas a las que prestan servicio, en su gran mayoría de lunes a viernes). Mientras otras, con una movilización pública saturada en las cuales pasan casi dos horas de ida y otras dos de vuelta, las que desarrollan sus actividades puertas afuera.

*PRESIDENTA DEL SINDICATO DE TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR, REGIÓN METROPOLITANA. ACTUALMENTE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE *LE MONDE DIPLOMATIQUE* EN MAYO 2020.

Y era tal vez esos mismos motivos los que no le dejaban tiempo para analizar en profundidad lo que en Chile estaba ocurriendo. Así pasó octubre, noviembre y diciembre. En enero ya en periodo estival hubo incluso menor preocupación por lo que ocurría a nivel país, y es acá donde se empieza a conocer la situación que se comienza a dar al otro lado del mundo, el coronavirus. Pero era China, literalmente al otro lado del mundo, por lo tanto, no parecía que fuese a afectar mayormente.

A fines de enero ya se sabía que este virus era altamente contagioso, pero a nivel del gremio, tal vez aún se seguía viendo lejos. En lo personal, mis empleadores me ayudaron a dimensionar la gravedad de lo que se venía, al cancelar ellos sus vacaciones que tenían programadas por el sudeste asiático durante febrero, y cambiando todos sus panoramas en un plazo de cuatro días. Esto activó mis alarmas y comencé a informarme más fuertemente sobre qué era esto que se estaba dando.

Temor al desempleo

Conversando con dirigentes del sindicato, quienes trabajan con médicos que se desarrollan profesionalmente en clínicas de los sectores más pudientes de la capital de Chile, comenzamos a activar ya las alarmas, pero como sindicato teníamos en ese momento otras preocupaciones que mantenían nuestra atención plena, por eso se pasó gran parte de febrero viéndolo como de fuera pero ya con una angustiante espera de cuándo se produciría el primer caso acá; esto hasta el 25 de febrero, fecha en la que se registró el primer caso de coronavirus o Covid-19 en Chile.

Como organización comenzamos a ver la importancia de mantenernos informadas, ya que muchos de nuestros empleadores y a quienes prestamos servicios tienen la posibilidad de salir de vacaciones a todos esos lugares en los cuales se estaba dando la propagación de este virus, por lo que no sabíamos muy bien cómo enfrentar esa situación. Ante estas dudas nos comunicamos en una primera instancia con la autoridad del trabajo para ver y revisar la situación legal a la que debían enfrentarse las compañeras; sin embargo, la respuesta se demoró en llegar casi tres semanas de enviadas las consultas, cuando la situación en Chile ya estaba absolutamente desatada en lo que se refería a la salud y a lo laboral.

Como sindicato comenzamos a recibir la primera semana algunos llamados, los primeros eran relatos de trabajadoras con susto eran de compañeras de trabajo puertas afuera, a quienes sus empleadores le solicitaban cambiar la modalidad de trabajo y pasar a prestar servicio ahora puertas adentro, no tomando en consideración que esas mujeres son en su mayoría trabajadoras jefas de hogar. Al encontrarse sin formalización de su trabajo temían perder su fuente laboral si no accedían a lo que sus empleadores le pedían para resguardar su propia seguridad.

Trabajos desinformalizados

Las trabajadoras puertas afuera han sido las más perjudicadas en este ámbito, también las trabajadoras migrantes tanto en el plano de la salud (por exponerse a diario para llegar a su trabajo) como

en lo laboral, por la desvinculación, dejándolas sin ingresos.

Esto no solo es una pandemia de salud pública, sino también una pandemia en lo económico y laboral, y es ahora cuando se comienza a visualizar la verdadera cara de Chile respecto a los derechos de las trabajadoras de casa, con una ley, la 20.786, dictada en el 2015 pero que en la práctica jamás se llegó a la fiscalización e implementación plena de dicha normativa.

Así es como nos enfrentamos a la presencia de esta pandemia con un número -según la máxima autoridad de derecho laboral- de 180.000 trabajadoras del gremio que no presentaban ningún tipo de formalización del trabajo que desarrollan. Eso demuestra que durante cinco años la autoridad hizo muy poco o nada por velar el cumplimiento de la ley, dejando a este gran número de trabajadoras ante la disyuntiva de elegir si cuidan su salud o generan ingresos para sus familias. Ellas se ven enfrentadas a escoger si mueren a causa de contraer el coronavirus o mueren de hambre. Esto porque los bajos ingresos tampoco les permiten tener capacidad de ahorro, por lo que no pueden parar de trabajar para cuidarse y proteger a su familia, menos aun cuando son jefas de hogar.

La pandemia del Covid-19 deja en evidencia la vulnerabilidad de quienes desarrollamos el trabajo de casa particular, porque las autoridades aún no se quieren hacer cargo de la fiscalización, igualación y creación de derechos que puedan tener o faltar para este grupo de trabajadoras:

- La ley 19.728 (2001) sobre seguro de cesantía dejó fuera de su cobertura a las trabajadoras de casa particular. Este seguro opera a través de una cuenta individual donde se acumulan los aportes de las cotizaciones mensuales más un fondo de cesantía solidario, que es un fondo de reparto con aportes del empleador y del Estado, y se utiliza para complementar el beneficio cuando la cuenta individual es insuficiente.
- Las trabajadoras están afectas a la ley 19.010 (1991) que establece una cuenta de indemnización del 4.11% de la remuneración imponible con cargo al empleador; esta es una cuenta de ahorro de indemnización, cuyos fondos le pertenecen a la trabajadora.
- La ley 21.227 recientemente dictada permite que las trabajadoras puedan hacer uso de los fondos de su cuenta de indemnización; con la modificación se pretende asimilar a lo que sería un seguro de cesantía, pero con la diferencia que acá el Estado no realiza aporte, por lo que una vez más se discrimina a las trabajadoras del gremio.

Obligaciones incumplidas

En lo que respecta al convenio 189 que Chile ratificó el 15 de junio de 2015, también el Estado se encuentra en incumplimiento, ya que con su ratificación se compromete a adoptar diversos tipos de medidas legislativas y de políticas públicas para lograr la implementación y disposiciones de este convenio. Entre las obligaciones que establece el Convenio 189 están:

- Artículo 3, “todo miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos, las

medidas previstas en el presente convenio para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber ... (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”.

- En su artículo 14, párrafo 1, “todo miembro, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y actuando en conformidad con la legislación nacional, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social”.

Como sindicato hemos visualizado y llamado a las autoridades a consecuencia de esta pandemia a realizar un trabajo en lo inmediato y también a largo plazo, que serían:

- La incorporación inmediata de las trabajadoras de casa particular al fondo solidario de cesantía, esta medida permitirá que las mujeres trabajadoras formalizadas del sector puedan acceder en igualdad y solidaridad a las medidas implementadas por el gobierno.

- La implementación de una renta básica de emergencia digna y que permita a las mujeres trabajadoras no formalizadas del sector poder mantener a sus familias durante el periodo de la emergencia.

- Fondos especiales y frescos que permitan una verdadera fiscalización de parte de la Inspección de Trabajo sobre el cumplimiento de la ley nº 20.786 que obliga a los/as empleadores a escriturar e inscribir el contrato de trabajo.

- La modificación de la legislación interna, comprometida por el Estado chileno al ratificar el Convenio 189 de la OIT, con el fin de terminar con todo estatus especial para las trabajadoras de casa particular y la igualación a los derechos laborales de todos/as los/as trabajadores del país.

Como podemos observar el estallido social no era que no afectara o mostrara la desigualdad de Chile con este gremio. Era que las trabajadoras no tenían tiempo de parar y observar dichas desigualdades. Hoy la pandemia Covid 19 las obligó a parar y le mostró la dura realidad que estaban viviendo y que si no nos movilizamos y nos unimos no habrá cambio posible porque seguiremos siendo invisibilizadas y abusadas por los empleadores pero también por el Estado y sus distintos organismos. En aspectos sociales el Estado debe hacerse cargo y no se puede seguir permitiendo que sea el mercado el que regule. ◆

La urgente necesidad de un cambio de enfoque

La ineficiente guerra contra el narcotráfico

por Eduardo Vergara B.*

A diario la cobertura a operativos contra el narcotráfico copa los medios. Operativos producto de una de las políticas más fracasadas de nuestra historia y que en impacto negativo y daño ha superado los que genera la droga misma (1). Miles de personas, desechables para el narco, son detenidas y encarceladas, mientras el poder real sigue operando con tranquilidad. A pesar de todo, los objetivos de reducir el consumo de drogas y el poder del narcotráfico no se lograron. Un cambio de enfoque es ya urgente.

Mientras la guerra contra las drogas ha fracasado en cumplir los objetivos mencionados, ha sido exitosa como herramienta de control social. Mujeres, jóvenes y quienes menos tienen pagan los costos. El 46% de los motivos de ingreso de la población femenina nacional recluida corresponde a drogas (Tarapacá 70% y Arica 65% (2)). Si a estas cifras además les sumamos los ingresos por delitos

*DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACIÓN CHILE 21, EX JEFE DIVISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, MINISTERIO DE INTERIOR. CIENTISTA POLÍTICO UNIVERSITY OF PORTLAND, MPA SEGURIDAD HUMANA, SCIENCES PO. ACTUALMENTE SUBSECRETARIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE *LE MONDE DIPLOMATIQUE* EN MAYO 2021.

relacionados a armas y homicidios, generando una categoría de criminalidad armada con fuerte relación al mundo de las drogas, explican el 57% de los ingresos totales. En el caso de los hombres, los ingresos relacionados con drogas llegan solo al 15% y en criminalidad armada (drogas, homicidios y armas) al 29%. Tal y como la cárcel chilena se explica en gran parte por delitos relacionados a drogas, algo similar ocurre en las detenciones. Mientras el 2012 en el país superamos las 85 mil detenciones por violaciones a la ley de drogas (233 al día), en los años posteriores estas se han estabilizado en torno a las 40 mil anuales bajando el 2019 a las 33mil. Además, entre el 2005 y marzo del 2020, el 64% de todas las detenciones por drogas efectuadas por Carabineros fue a menores de 29 años (3). Este círculo de persecución-castigo-libertad-castigo se repite una y otra vez sobre personas y menores de edad que pueden tener carreras delictuales de hasta 50 años, presas en una máquina de producción de capital humano prácticamente ilimitado para que el narco los transforme en soldados desechables.

Narcos aumentan su poder

Estas cifras hablan además de lo que sucede en los territorios donde el narco ha aumentado su poder e incluso reemplazado al Estado en entregar recursos, protección e incluso trabajo. Ahí hay personas que terminan presas en espacios donde durante el día y la noche hay quitadas de droga, asaltos, balaceras y homicidios. De igual forma que la pandemia del Covid 19 ha permi-

tido el aumento de poder. Cada centímetro que el Estado se contrae es un centímetro que gana el crimen. Si a nivel país el 58% de las personas aseguró presenciar con frecuencia la venta de drogas, el 52% robos en la vía pública y el 39% incluso balaceras en sus barrios (4), la situación en las zonas de sacrificio de seguridad es peor. Mientras el 2020 los homicidios aumentaron un 29% a nivel nacional, de acuerdo al Ministerio Público en ciertos territorios del sur de la Región Metropolitana fue en un 80%. Con significativas relaciones entre los condenados e imputados por homicidio con violaciones a la ley de drogas y ajustes de cuenta, las armas jugaron también un rol central. De acuerdo a la PDI, el uso de armas en estos delitos ha aumentado en un 39% a nivel nacional y en la RM en un 58%, gran parte ligados a actividad relacionada con criminalidad organizada. Como si fuera poco, de acuerdo al Proyecto Zonas Ocupadas CIPER/UDP más reciente, las “zonas ocupadas”, territorios dominados por el narco en la Región Metropolitana, llegaron a los 174, duplicándose en una década (5).

Las platas de la droga

En paralelo, esta guerra permite la generación de recursos millonarios y poder. Todo a costa de una trama que se viene repitiendo en nuestro hemisferio y causa enormes violaciones a los derechos humanos, homicidios y un gasto que podría ser destinado a educación, salud y tanta necesidad que acarreamos por décadas. Existen diferentes estimaciones respecto a los ingresos que estaría

generando la venta de drogas. Una de ellas, en base a cifras de consumo y precios de calle estimados, concluye que solo por concepto de venta de marihuana, cocaína y pasta base el gasto el año 2018 rodeaba los 351 millones de dólares (un millón de dólares diarios) en Chile. Si bien estimaciones relevantes, quedan cortas al no considerar las cifras reales (que solo podemos estimar) de consumo y venta de tanto drogas convencionales como de diseño. A esto también se le deberían sumar los ingresos generados por el tránsito de drogas y otras actividades económicas ilícitas realizadas. Los ingresos que podría estar generando el crimen podrían fácilmente duplicar o quintuplicar estas cifras.

¿Por qué seguimos entregando millonarios recursos al narco, gastando en perseguirlo sin éxito y permitiendo que controle la salud pública? ¿Por qué mejor no quitarle el monopolio al crimen y permitir que el Estado se haga cargo de la problemática de las drogas? Si bien hace tiempo venimos argumentando la necesidad de regular ciertas drogas (6), hoy es el momento de definir una hoja de ruta para implementar un plan regulatorio. Mientras es irresponsable argumentar que con la legalización de las drogas se terminará el narcotráfico y el crimen, sí lograría quitarle gran parte de sus recursos. Con ello, además el Estado podría de una vez por todas tomar control del mercado desde una perspectiva de la protección a las personas y no de la persecución prohibicionista obsesiva que prima hoy.

Evidencia y experiencias de regulación de cannabis para analizar y extraer de ellas aciertos y errores abundan. En EEUU 16 estados han legalizado la marihuana para fines generales y 36 para medicinales. Si bien el impacto sobre indicadores como el crimen todavía está por verse, el impacto económico ha sido gigantesco. Parte de lo que antes se llevaba la ilegalidad, hoy significa recaudación de impuestos y trabajo. El 2019 Colorado recaudó más de 302 millones de dólares en impuestos y se estima que una regulación nacional podría llegar a los 128 mil millones de dólares. Por lo demás, la industria del cannabis al 2020 generaba 243,700 (7) puestos de trabajo a tiempo completo. Más cerca nuestro se encuentra Uruguay. Las 10 toneladas que se cosechan legalmente ahí equivalen a 20 avionetas menos que llegan desde Paraguay (8) que tiene un mercado que genera 700 millones de dólares al año. Los problemas no llegaron como se anunció. La venta es segura, el país no se transformó en un paraíso canábico, los millones de dólares que genera el comercio entraron a la economía formal y no a economías ilegales, además se generaron puestos de trabajo (9). La percepción de riesgo entre escolares en vez de aumentar como se predecía, se estabilizó tras la caída del 2014 (10) y la cantidad de adolescentes consumidores no se disparó sino se mantuvo estable mientras la edad del primer consumo se retrasó. Efectivamente aumentó el consumo en adultos, pero siguiendo una tendencia que venía desde el 2001. Sin ir más lejos en el año 2016 en Chile autorizamos

la plantación, cosecha y cultivo de 1.500 kilos de cogollos dirigida por la Fundación Daya que posteriormente fue transportada desde el Maule a Valparaíso con participación de Carabineros, la PDI, el SAG y autoridades regionales.

Es urgente abrir debates serios en torno a la regulación de las drogas, pero lo relevante en estos momentos es avanzar hacia un marco de estricta regulación de la cannabis. Este debe contemplar al menos los siguientes principios:

1) Salud Pública: La salud de las personas no puede quedar en manos de economías criminales sino del Estado.

2) Seguridad Humana: El sistema actual empuja a que las personas tengan que interactuar y depender de economías ilegales en ambientes de alta inseguridad. Transformando la economía ilegal en legal, permitirá la adquisición y el uso sea en ambientes seguros.

3) Seguridad interior: El modelo actual permite que las economías ilegales generen recursos para financiar sus actividades y aumentar poder. Regular es quitarle una fracción significativa de recursos, reducir el gasto ineficiente en perseguirles y aumentar la eficiencia policial.

4) Educación basada en la evidencia y prevención con foco en reducción de daños: El sistema de educación y prevención no cumplió sus objetivos. Es necesario avanzar hacia una educación basada en la evidencia y prevención con foco en la reducción de daños.

5) Recaudación de impuestos: La economía legal puede generar importantes recaudaciones

de impuestos tal y como lo hemos visto en otros países. Esta debe estar dirigida a la educación, la prevención, el tratamiento y a financiar la institucionalidad e investigación científica.

6) Eficiencia en el gasto: El Estado destina millones de recursos a instituciones públicas (Ministerio del Interior, Carabineros, PDI, FFAA, Ministerio Público, Sistema Judicial, etc.). Los recursos deben estar destinados a una persecución efectiva y focalizada al crimen organizado.

7) Reactivación económica y empleo: Hoy los empleos son otorgados por las economías ilegales. Debemos permitir que el empleo sea generado de forma legal, amparado en condiciones de trabajo decente bajo una industria dinámica.

8) Justicia y Derechos Humanos: El enfoque actual profundiza la criminalización e incluso las violaciones a derechos humanos al perseguir personas por usar drogas para fines personales y sobre todo con fines medicinales (a pesar que la ley lo permite). La desproporción en las penas y la vigilancia son particularmente sobre los sectores vulnerables. Debemos garantizar el ejercicio de derechos y que nadie tema ser castigado injustamente.

No será fácil derribar los tabúes ideológicos, trabas morales y conveniencias políticas que impiden que de una vez por todas le quitemos el monopolio del financiamiento, la salud pública y el poder al narco. Pero cambiar el enfoque y avanzar es urgente, precisamente porque son las personas más vulnerables, especialmente en mo-

mentos de crisis sociales y económicas como las que estamos viviendo, que se transforman en las principales víctimas. Con todo, dejar que el poder del narco siga aumentando es prácticamente darse por vencido y caer en un espiral interminable de guerras, sangre, corrupción y muerte. ♦

1. Chile y las drogas: Una revisión sistemática mirando al futuro. Eduardo Vergara, Editor. Editorial Cuarto Propio, 2016.
2. Datos procesados por el autor en base a Compendio Estadístico Penitenciario 2019 de Gendarmería de Chile. 2020.
3. Observatorio de Datos de Seguridad. Monitor de Seguridad. <https://data.monitordeseguridad.org>
4. Estudio Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial. Monito de Seguridad, Fundación Chile 21. Enero, 2021. Santiago, Chile.
5. “Zonas ocupadas” se duplicaron en una década: territorios dominados por el narco en la Región Metropolitana pasaron de 80 a 174. CIPER Chile. Abril 2021. <https://www.ciperchile.cl/2021/04/20/zonas-ocupadas-se-duplicaron-en-una-decada-territorios-dominados-por-el-narco-en-la-region-metropolitana-pasaron-de-80-a-174/>
6. Propuestas para regular el consumo y venta al por menor de drogas de base vegetal. Vergara, 2013 en “De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las drogas. FES Seguridad. Bogotá, Colombia.
7. 2020 Cannabis Jobs Report: Legal cannabis now supports 243,700 full-time American jobs. <https://www.leafly.com/news/industry/243700-marijuana-jobs-how-many-in-america>
8. Marihuana cotidiana. El País. <https://elpais.com/sociedad/2021-04-20/marihuana-cotidiana.html>
9. Exposición en el Congreso Internacional del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis. Diego Oliveira. <https://dolivera.medium.com/exposición-en-el-congreso-internacional-del-observatorio-europeo-de-cultivo-y-consumo-de-cannabis-11124e3384f2>
10. VII encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Junta Nacional de Drogas de Uruguay. 2020

Libros publicados por la Editorial Aún Creemos en los Sueños

Acompañamiento docente en las prácticas de trabajo social
Temporeras y temporeros
La nueva cuestión agraria
Educación y política
Mujeres Constituyentes
La hora de los nadie Rodrigo Mundaca
Vivienda digna
Carabineros y fuerzas armadas
Redes sociales y medios de comunicación
Pandemia Covid-19 en Chile y el mundo
La Rusia de Putin
Evangélicos
Justicia Fiscal
Avanzando hacia relaciones más colaborativas entre familias y escuelas
El futuro será verde
La educación en tiempos de crisis
Abecedario para cambiar el mundo
Proceso constituyente
Luis Sepúlveda, últimos textos
Interculturalidad(es)
La violencia y la lucha social
La rebelión chilena
Corrupción
Wallmapu colonizado
¿Cómo enfrentamos el cambio climático?
El futuro del trabajo
La escuela en tiempos de migración
Episodios históricos
Crisis en la Iglesia católica chilena
Chalecos amarillos. Sublevación en Francia
Blanco y negro muy negro de Guillermo Nuñez
Derechos de los animales
Medioambiente y desarrollo
Revolución feminista
Datos históricos sobre la Democracia Cristiana, Jorge Magasich
Lucha mapuche. En la huella de Matías Catrileo
Noam Chomsky. Cinco entrevistas
Inmigrantes y refugiados
Federica Matta. Manifiesto de autoeducación artística
La resistencia zapatista
Reforma agraria
Siria
Pueblo mapuche y autodeterminación
Otra política es posible
El derecho a la rebelión
El viaje de los imaginarios en 31 días por Federica Matta
Democratizar las comunicaciones
A cambiar el modelo
Que la audacia cambie de lado Serge Halimi
Videojuegos
Jacques Derrida
Una historia que debo contar por Luis Sepúlveda
Allende, discursos fundamentales
Le Monde Diplomatique. Más que un periódico



Libros en venta en librerías y en Le Monde Diplomatique, San Antonio 434, Santiago.
Teléfono (56) 22 608 35 24 - **Por internet en www.editorialauncreemos.cl**

**Este libro se terminó de imprimir en el mes de abril de 2022 en
Gráfica LOM, Concha y Toro 29 - Santiago centro - Chile**